

I

CONSTITUCION DE BAYONA

Esta Constitución fue promulgada el 6 de julio de 1808 por José Napoleón. Aunque nunca cobró vigencia sus preceptos fueron tomados por varias de las Constituciones de América.

La Constitución se componía de 146 artículos, en los cuales su gran mayoría se dedicaba a estructurar al Estado, y sólo unos cuantos reconocían derechos de los habitantes de España y sus provincias.

Entre los escasos derechos que se reconocían se encuentran:

- La inviolabilidad del domicilio (126);
- La detención sólo en virtud de orden legal y escrita, salvo en caso de flagrante delito; (127)
- Abolición de los tormentos (133)
- Se establecía que dos años después de haberse ejecutado enteramente la Constitución se establecería la libertad de imprenta a través de una ley (145); sin embargo se crea una Junta de cinco senadores con el encargo de velar sobre la libertad de imprenta. (45).

En lo referente a la organización del Estado se regulaba:

- a) La Corona: Con un Rey, seis Jefes de la Casa Real (25) y nueve ministerios (27)
- b) El Senado: Compuesto por los Infantes de España que tengan 18 años cumplidos y por 24 individuos nombrados por el Rey (32)
- c) El Consejo de Estado: Formado entre 30 a 60 individuos divididos en secciones (52)
- d) Las Cortes: Se componían por 172 individuos divididos en tres estamentos. (61) El estamento del clero integrado por 25 arzobispos y obispos, la nobleza por 25 nobles que se titulaban grandes de las Cortes, y el Pueblo, se componía de sesenta y dos diputados de ciudades principales de España, 15 negociantes o comerciantes y 15 diputados de las Universidades. Las provincias españolas de América y Asia tenían veintidós diputados "cerca del Gobierno" (91), encargados de promover sus intereses y de ser sus representantes en las Cortes.
- e) Poder Judicial: Se establecía que el orden judicial era independiente, sin embargo, la justicia se administraba en nombre del rey. Existían Jueces conciliadores que formaban un tribunal pacificador; Juzgados de Primera Instancia, audiencias o tribunales de apelación; Un tribunal de reposición y una Alta Corte.

CONSTITUCION DE BAYONA DE 1808

En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias.

Habiendo oído a la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rhin, etc, etc.

Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde como ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos.

TITULO I

De La Religión

Artículo 1º. La religión Católica, Apostólica, Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey, y no se permitirá ninguna otra.

TITULO II

De La Sucesión De La Corona

Artículo 2º. La Corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y legítima, de varón, por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las hembras.

En defecto de nuestra descendencia masculina natural y legítima, la Corona de España y de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, y a sus herederos y descendientes varones, naturales y legítimos o adoptivos.

En defecto de la descendencia masculina, natural o legítima o de dicho nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, pasará la Corona a los descendientes varones, naturales y legítimos, del príncipe Luis Napoleón, Rey de Holanda.

En defecto de descendencia masculina natural y legítima del príncipe Luis Napoleón, a los descendientes varones naturales y legítimos del príncipe Jerónimo Napoleón, Rey de Westfalia.

En defecto de éstos, al hijo primogénito, nacido antes de la muerte del último Rey, de la hija primogénita entre los que tengan hijos varones, y a su descendencia masculina, natural y legítima; y en caso que el último Rey no hubiese dejado hija que tenga varón, a aquél que haya sido designado por su testamento, ya sea entre sus parientes más cercanos, o ya entre aquellos que haya creído más dignos de gobernar a los españoles.

Esta designación del Rey se presentará a las Cortes para su aprobación.

Artículo 3º. La Corona de las Españas y de las Indias no podrá reunirse nunca con otra en una misma persona.

Artículo 4º. En todos los edictos, leyes y reglamentos, los títulos del Rey de las Españas serán: D. N., por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias.

Artículo 5º. El Rey, al subir al Trono o al llegar a la mayor edad, prestará juramento sobre los Evangelios, o en presencia del Senado, de las Cortes y del Consejo Real, llamado de Castilla.

El ministro Secretario de Estado extenderá el acta de la prestación del juramento.

Artículo 6º. La fórmula del juramento del Rey será la siguiente: “Juro sobre los santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la Nación Española.”

Artículo 7º. Los pueblos de las Españas y de las Indias prestarán juramento al Rey en esta forma: “Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes.”

TITULO III

De La Regencia

Artículo 8º. El Rey será menor hasta la edad de diez y ocho años cumplidos.

Durante su menor edad habrá un Regente del Reino.

Artículo 9º. El Regente deberá tener, a lo menos, veinticinco años cumplidos.

Artículo 10. Será Regente el que hubiere sido designado por el Rey predecesor, entre los infantes que tengan la edad determinada en el artículo antecedente.

Artículo 11. En defecto de esta designación del Rey y predecesor, recaerá la Regencia en el Infante más distante del Trono en el orden de herencia, que tenga veinticinco años cumplidos.

Artículo 12. Si a causa de la menor edad del Infante más distante del Trono en el orden de herencia, recayese la Regencia en un pariente más próximo, éste continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que el Rey llegue a su mayor edad.

Artículo 13. El Regente no será personalmente responsable de los actos de su administración.

Artículo 14. Todos los actos de la Regencia saldrán a nombre del Rey menor.

Artículo 15. De la renta con que está dotada la Corona, se tomará la cuarta parte para dotación del Regente.

Artículo 16. En el caso de no haber designado Regente el Rey predecesor, y de no tener veinticinco años cumplidos ninguno de los Infantes, se formará un Consejo de Regencia, compuesto de los siete senadores más antiguos.

Artículo 17. Todos los negocios del Estado se decidirán a pluralidad de votos por el Consejo de Regencia, y el Ministro Secretario de Estado llevará registro de las deliberaciones.

Artículo 18. La Regencia no dará derecho alguno sobre la persona del Rey menor.

Artículo 19. La guarda del Rey menor se confiará al Príncipe designado a este efecto por el predecesor del Rey menor, y en defecto de esta designación a su madre.

Artículo 20. Un Consejo de tutela, compuesto de cinco senadores nombrados por el último Rey, tendrá el especial encargo de cuidar de la educación del Rey menor, y será consultado en todos los negocios de importancia relativos a su persona y a su casa.

Si el último Rey no hubiera designado los senadores, compondrán este Consejo los cinco más antiguos.

En caso que hubiera al mismo tiempo Consejo de Regencia, compondrán el Consejo de tutela los cinco senadores, que se sigan por orden de antigüedad a los del Consejo de Regencia.

TITULO IV

De La Dotación De La Corona

Artículo 21. El patrimonio de la Corona se compondrá de los palacios de Madrid, de El Escorial, de San Ildefonso, de Aranjuez, de El Pardo y de todos los demás que hasta ahora han pertenecido a la misma Corona, con los parques, bosques, cercados y propiedades dependientes de ellos, de cualquier naturaleza que sean.

Las rentas de estos bienes entrarán en el Tesoro de la Corona, y si no llegan a la suma anual de un millón de pesos fuertes, se les agregarán otros bienes patrimoniales, hasta que su producto o renta total complete esta suma.

Artículo 22. El Tesoro público entregará al de la Corona una suma anual de dos millones de pesos fuertes, por duodécimas partes o mesadas.

Artículo 23. Los Infantes de España, luego que lleguen a la edad de doce años, gozarán por alimentos una renta anual, a saber:

El Príncipe heredero, de doscientos mil pesos fuertes.

Cada uno de los infantes, de cien mil pesos fuertes.

Cada una de las infantas, de cincuenta mil pesos fuertes.

El Tesoro público entregará estas sumas al Tesoro de la Corona.

Artículo 24. La Reina tendrá de viudedad cuatrocientos mil fuertes, que se pagarán del Tesoro de la Corona.

TITULO V

De Los Oficios De La Casa Real

Artículo 25. Los jefes de la Casa Real serán seis, a saber:

Un capellán mayor.
Un mayordomo mayor.
Un camarero mayor.
Un caballerizo mayor.
Un montero mayor.
Un gran maestro de ceremonias.

Artículo 26. Los gentiles hombres de Cámara, mayordomos de semana, capellanes de honor, maestros de ceremonias, caballerizos y caballeros, son de la servidumbre de Casa Real.

TITULO VI

Del Ministerio

Artículo 27. Habrá nueve Ministerios, a saber:

Un Ministerio de Justicia.
Otro de Negocios eclesiásticos.
Otro de Negocios extranjeros.
Otro de lo Interior.
Otro de Hacienda.
Otro de Guerra.
Otro de Marina.
Otro de Indias.
Otro de Policía general.

Artículo 28. Un Secretario de Estado, con la calidad de Ministro, refrendará todos los decretos.

Artículo 29. El Rey podrá reunir, cuando lo tenga por conveniente, el Ministerio de Negocios eclesiásticos al de Justicia y el de Policía General al de lo interior.

Artículo 30. No habrá otra preferencia entre los Ministros que la de la antigüedad de sus nombramientos.

Artículo 31. Los Ministros, cada uno en la parte que le toca, serán responsables de la ejecución de las leyes y de las órdenes del Rey.

TITULO VII

Del Senado

Artículo 32. El Senado se compondrá:

- 1.º De los Infantes de España que tengan diez y ocho años cumplidos.
- 2.º De veinticuatro individuos, nombrados por el Rey entre los ministros, los capitanes generales del Ejército y Armada, los embajadores consejeros del Estado y los del Consejo Real.

Artículo 33. Ninguno podrá ser nombrado senador si no tiene cuarenta años cumplidos.

Artículo 34. Las plazas de senador serán de por vida. No se podrá privar a los senadores del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia legal dada por los Tribunales competentes.

Artículo 35. Los consejeros de Estado actuales serán individuos del Senado.

No se hará ningún nombramiento hasta que hayan quedado reducidos a menos del número de veinticuatro, determinado por el Art. 32.

Artículo 36. El presidente del Senado será nombrado por el Rey, y elegido entre los senadores.

Sus funciones durarán un año.

Artículo 37. Convocará el Senado; o de orden del Rey, o a petición de las Juntas de que se hablará después en los Arts. 40 y 45, o para los negocios interiores del Cuerpo.

Artículo 38. En caso de sublevación a mano armada, o de inquietudes que amenacen la seguridad del Estado, el Senado, a propuesta del Rey, podrá suspender el imperio de la Constitución por tiempo y en lugares determinados.

Podrá, asimismo, en casos de urgencia y a propuesta del Rey tomar las demás medidas extraordinarias, que exija la conservación de la seguridad pública.

Artículo 39. Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta última se establezca por ley, como se previene después, Título XIII, Artículo 145.

El Senado ejercerá estas facultades del modo que se prescribirá en los artículos siguientes.

Artículo 40. Una junta de cinco senadores nombrados por el mismo Senado, conocerá, en virtud de parte que le dé el Ministro de Policía general, de las prisiones ejecutadas con arreglo al Art. 134 del Título XIII, cuando las personas presas no han sido puestas en libertad, o entregadas a disposición de los tribunales, dentro de un mes de su prisión.

Esta Junta se llamará Junta senatorial de libertad individual.

Artículo 41. Todas las personas presas y no puestas en libertad o en juicio dentro del mes de su prisión, podrán recurrir directamente por sí, sus parientes o representantes, y por medio de petición, a la Junta senatorial de libertad individual.

Artículo 42. Cuando la Junta senatorial entienda que el interés del Estado no justifica la detención prolongada por más de un mes, requerirá al Ministro que mandó la prisión, para que haga poner en libertad a la persona detenida o la entregue a disposición del Tribunal competente.

Artículo 43. Si después de tres requisiciones consecutivas, hechas en el espacio de un mes, la persona detenida no fuese puesta en libertad, o remitida a los Tribunales ordinarios, la Junta pedirá que se convoque al Senado, el cual, si hay méritos para ello, hará la siguiente declaración:

“Hay vehementes presunciones de que N. está detenido arbitrariamente.”

El Presidente pondrá en manos del Rey la deliberación motivada del Senado.

Artículo 44. Esa deliberación será examinada, en virtud de orden del Rey por una Junta compuesta de los presidentes de Sección del Consejo de Estado y de cinco individuos del Consejo Real.

Artículo 45. Una Junta de cinco senadores, nombrados por el mismo Senado, tendrá el encargo de velar sobre la libertad de imprenta.

Los papeles periódicos no se comprenderán en las disposiciones de este artículo.

Esta Junta se llamará Junta senatorial de libertad de Imprenta.

Artículo 46. Los autores, impresores y libreros, que crean tener motivo para quejarse de que se les haya impedido la impresión o la venta de una obra, podrán recurrir directamente, y por medio de petición, a la Junta senatorial de la libertad de imprenta.

Artículo 47. Cuando la Junta entienda que la publicación de la obra no perjudica al Estado, requerirá al Ministro que ha dado la orden para que la revoque.

Artículo 48. Si después de tres requisiciones consecutivas, hechas en el espacio de un mes, no la revocase, la Junta pedirá que se convoque el Senado, el cual, si hay méritos para ello, hará la declaración siguiente:

“Hay vehementes presunciones de que la libertad de la imprenta ha sido quebrantada.”

El Presidente pondrá en manos del Rey la deliberación motivada del Senado.

Artículo 49. Esta deliberación será examinada de orden del Rey, por una Junta compuesta como se previno arriba (Artículo 44.)

Artículo 50. Los individuos de estas dos Juntas se renovarán por quintas partes cada seis meses.

Artículo 51. Sólo el Senado, a propuesta del Rey, podrá anular como inconstitucionales las operaciones de las Juntas de elección, para el nombramiento de diputados de las provincias, o las de los Ayuntamientos para el nombramiento de diputados de las ciudades.

TITULO VIII

Del Consejo De Estado

Artículo 52. Habrá un Consejo de Estado presidido por el Rey, que se compondrá de treinta individuos a lo menos, y de sesenta cuando más, y se dividirán en seis secciones, a saber:

Sección de Justicia y de Negocios Eclesiásticos.- Sección de lo Interior y Policía General.- Sección de Hacienda.- Sección de Guerra.- Sección de Marina y Sección de Indias. Cada sección tendrá un presidente y cuatro individuos a lo menos.

Artículo 53. El Príncipe heredero podrá asistir a las sesiones del Consejo de Estado luego que llegue a la edad de quince años.

Artículo 54. Serán individuos natos del Consejo de Estado, los Ministros y el Presidente del Real; asistirán a sus sesiones cuando lo tengan por conveniente; no harán parte de ninguna Sección, ni entrarán en cuenta para el número fijado en el artículo precedente.

Artículo 55. Habrá seis diputados de Indias adjuntos a la Sección de Indias, con voz consultiva, conforme a lo que se establece más adelante, Art. 95. Título X.

Artículo 56. El Consejo de Estado tendrá consultores, asistentes y abogados del Consejo.

Artículo 57. Los proyectos de leyes civiles y criminales y los reglamentos generales de administración pública serán examinados y extendidos por el Consejo de Estado.

Artículo 58. Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los Cuerpos administrativos y judiciales, y de la parte contenciosa de la Administración pública.

Artículo 59. El Consejo de Estado, en los negocios de su dotación, no tendrá sino voto consultivo.

Artículo 60. Los decretos del Rey sobre los objetos correspondiente a la decisión de las Cortes, tendrán fuerza de ley hasta las primeras que se celebren, siempre que sean ventilados en el Consejo de Estado.

TITULO IX

De Las Cortes

Artículo 61. Habrá Cortes o Juntas de la Nación, compuestas de 172 individuos, divididos en tres estamentos, a saber:

El Estamento del clero. - El de la nobleza. - El del pueblo. - El Estamento del clero se colocará a la derecha del Trono, el de la nobleza, a la izquierda, y en frente el Estamento del pueblo.

Artículo 62. El Estamento del clero se compondrá de veinticinco arzobispos y obispos.

Artículo 63. El Estamento de la nobleza se compondrá de veinticinco nobles, que se titularán Grandes de Cortes.

Artículo 64. El Estamento del pueblo se compondrá:

- 1.^º De sesenta y dos diputados de las provincias de España e Indias.
- 2.^º De treinta diputados de las ciudades principales de España e islas adyacentes.
- 3.^º De quince negociantes o comerciantes.
- 4.^º De quince diputados de las Universidades, personas sabias o distinguidas por su mérito personal en las ciencias y en las artes.

Artículo 65. Los arzobispos y obispos, que componen el Estamento del clero, serán elevados a la clase de individuos de Cortes por una cédula sellada con el gran sello del Estado, y no podrán ser privados del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia dada por los tribunales competentes y en forma legal.

Artículo 66. Los nobles, para ser elevados a la clase de Grandes de Cortes, deberán disfrutar una renta anual de veinte mil pesos fuertes a lo menos o haber hecho largos e importantes servicios en la carrera civil o militar. Serán elevados a esta clase por una cédula sellada con el gran sello del Estado, y no podrán ser privados del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia dada por los tribunales competentes y en forma legal.

Artículo 67. Los diputados de las provincias de España e islas adyacentes, serán nombrados por éstas a razón de un diputado por 300,000 habitantes, poco más o menos. Para este efecto se dividirán las provincias en partidos de elección de un diputado.

Artículo 68. La Junta que ha de proceder a la elección del diputado del partido recibirá su organización de una ley hecha en Cortes, y hasta esta época se compondrán:

- 1.^º Del decano de las regiones de todo pueblo que tenga a lo menos cien habitantes; y si en algún partido no hay veinte pueblos, que tengan este vecindario, se reunirán las

poblaciones pequeñas, para dar un elector a razón de cien habitantes, sacándose ésta por suerte entre los regidores decanos de cada uno de los referidos pueblos.

2.º Del decano de los curas de los pueblos principales del partido, los cuales se designarán de manera que el número de los electores eclesiásticos no exceda del tercio del número total de los individuos de la Junta de elección.

Artículo 69. Las Juntas de elección no podrán celebrarse sino en virtud de Real cédula de convocatoria, en que se expresen el objeto y lugar de la reunión, y la época de la apertura y de la conclusión de la Junta. El Presidente de ella será nombrado por el Rey.

Artículo 70. La elección de diputados de las provincias de Indias se hará conforme a lo que se previene en el Artículo 93 Título X.

Artículo 71. Los diputados de las 30 ciudades principales del Reino, serán nombrados por el Ayuntamiento de cada una de ellas.

Artículo 72. Para ser diputado por las provincias o por las ciudades se necesitará ser propietario de bienes raíces.

Artículo 73. Los quince negociantes o comerciantes serán elegidos entre los individuos de las Juntas de comercio y entre los comerciantes más ricos y más acreditados del Reino; y serán nombrados por el Rey entre aquellos que se hallen comprendidos en una lista de quince individuos, formada por cada uno de los Tribunales y Juntas de Comercio.

El Tribunal y la Junta de Comercio se reunirán en cada ciudad para formar en común su lista de presentación.

Artículo 74. Los diputados de las Universidades, sabios y hombres distinguidos por su mérito personal en las ciencias y en las artes, serán nombrados por el Rey entre los comprendidos en una lista:

1.º De quince candidatos presentados por el Consejo Real; y 2.º De siete candidatos presentados por cada una de las Universidades del Reino.

Artículo 75. Los individuos del Estamento del pueblo se renovarán de unas Cortes para otras, pero podrán ser reelegidos para las Cortes inmediatas. Sin embargo, el que

hubiese asistido a dos Juntas de Cortes consecutivas, no podrá ser nombrado de nuevo sino guardando un hueco de tres años.

Artículo 76. Las Cortes se juntarán en virtud de convocatoria hecha por el Rey. No podrán ser diferidas, prorrogadas ni disueltas sino de su orden. Se juntarán a lo menos una vez cada tres años.

Artículo 77. El Presidente de las Cortes será nombrado por el Rey entre tres candidatos que propondrán las Cortes mismas por escrutinio y a pluralidad absoluta de votos.

Artículo 78. A la apertura de cada sesión nombrarán las Cortes:

- 1.º Tres candidatos para la presidencia.
- 2.º Dos vicepresidentes y dos secretarios.
- 3.º Cuatro Comisiones compuestas de cinco individuos cada una, a saber:
Comisión de Justicia.
Comisión de lo Interior.
Comisión de Hacienda.
Comisión de Indias.

El más anciano, de los que asistan a la Junta, la presidirá hasta la elección de Presidente.

Artículo 79. Los Vice-Presidentes sustituirán al Presidente, en caso de ausencia o impedimento por el orden en que fueron nombrados.

Artículo 80. Las sesiones de las Cortes no serán públicas y sus votaciones se harán en voz o por escrutinio; y para que haya resolución, se necesitará la pluralidad absoluta de votos tomados individualmente.

Artículo 81. Las opiniones y las votaciones no deberán divulgarse ni imprimirse.

Toda publicación por medio de impresión o carteles, hecha por la Junta de Cortes o por alguno de sus individuos, se considerará como un acto de rebelión.

Artículo 82. La ley fijará dentro tres en tres años la cuota de las rentas y gastos anuales del Estado, y esta ley la presentarán oradores del Consejo de Estado a la deliberación y aprobación de las Cortes.

Las variaciones que se hayan de hacer en el Código Civil, en el Código Penal, en el sistema de impuestos o en el sistema de monedas, serán propuestas del mismo modo a la deliberación y aprobación de las Cortes.

Artículo 83. Los proyectos de ley se comunicarán previamente por las Secciones del Consejo de Estado a las Comisiones respectivas de las Cortes nombradas al tiempo de su apertura.

Artículo 84. Las cuentas de Hacienda dadas por cargo y data con distinción del ejercicio de cada año y publicadas anualmente por medio de la imprenta, serán presentadas por el Ministro de Hacienda a las Cortes, y éstas podrán hacer sobre los abusos introducidos en la Administración las representaciones que juzguen convenientes.

Artículo 85. En caso de que las Cortes tengan que manifestar quejas graves y motivadas sobre la conducta de un Ministro, la representación, que contenga estas quejas y la exposición de sus fundamentos, votada que sea, será presentada al Trono por una diputación.

Examinará esta representación de orden del Rey, una Comisión compuesta de seis consejeros de Estado y de seis individuos del Consejo Real.

Artículo 86. Los decretos del Rey, que se expidan a consecuencia de deliberación y aprobación de las Cortes, se promulgarán con esta fórmula: “Ofídas las Cortes.”

TITULO X

De Los Reinos y Provincias Españolas De América Y Asia

Artículo 87. Los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli.

Artículo 88. Será libre en dichos reinos y provincias toda especie de cultivo e industria.

Artículo 89. Se permitirá el comercio recíproco en los reinos y provincias entre sí y con la Metrópoli.

Artículo 90. No podrá concederse privilegio alguno particular de exportación o importación en dichos reinos y provincias.

Artículo 91. Cada reino y provincia tendrá constantemente cerca del Gobierno diputados encargados de promover sus intereses, y de ser sus representantes en las Cortes.

Artículo 92. Estos diputados serán en número de veintidós, a saber:

Dos de Nueva España.

Dos del Perú.

Dos del Nuevo Reino de Granada.

Dos de Buenos Aires.

Dos de Filipinas.

Uno de la Isla de Cuba.

Uno de Puerto Rico.

Uno de la provincia de Venezuela.

Uno de Charcas.

Uno de Quito.

Uno de Chile.

Uno de Cuzco.

Uno de Guatémala.

Uno de Yucatán.

Uno de Guadalajara.

Uno de las provincias internas occidentales de Nueva España, y uno de las provincias orientales.

Artículo 93. Estos diputados serán nombrados por los Ayuntamientos de los pueblos que designen los virreyes o capitanes generales en sus respectivos territorios.

Para ser nombrados deberán ser propietarios de bienes raíces y naturales de las mismas provincias.

Cada Ayuntamiento elegirá a pluralidad de votos un individuo, y el acto de los nombramientos se remitirá al Virrey o capitán general.

Será diputado el que reúna mayor número de votos entre los individuos elegidos en los Ayuntamientos.

En caso de igualdad decidirá la suerte.

Artículo 94. Los diputados ejercerán sus funciones por el término de ocho años. Si al concluirse este término no hubiesen sido reemplazados, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la llegada de sus sucesores.

Artículo 95. Seis diputados nombrados por el Rey entre los individuos de la Diputación, de los reinos y provincias españolas de América y Asia, serán adjuntos en el Consejo de Estado y Sección de Indias. Tendrán voz consultiva en todos los negocios tocantes a los reinos y provincias españolas de América y Asia.

TITULO XI

De Orden Judicial

Artículo 96. Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales.

Artículo 97. El orden judicial será independiente en sus funciones.

Artículo 98. La justicia se administrará en nombre del Rey, por juzgados y tribunales que él mismo establecerá.

Por tanto, los tribunales que tiencen atribuciones especiales, y todas las justicias del abadengo, órdenes y señorío, quedan suprimidas.

Artículo 99. El Rey nombrará todos los jueces.

Artículo 100. No podrá procederse a la destitución de un juez sino a consecuencia de denuncia hecha por el presidente o el procurador general del Consejo Real, y deliberación motivada del mismo Consejo, sujeta a la aprobación del Rey.

Artículo 101. Habrá jueces conciliadores que formen un Tribunal de pacificación, Juzgados de primera instancia, Audiencias o Tribunales de apelación, un Tribunal de reposición para todo el Reino y una alta Corte Real.

Artículo 102. Las sentencias dadas en última instancia deberán tener su plena y entera ejecución, y no podrán someterse a otro Tribunal, sino en caso de haber sido anuladas por el Tribunal de reposición.

Artículo 103. El número de los Juzgados de primera instancia se determinará según lo exijan los territorios.

El número de las Audiencias o Tribunales de apelación repartidas por toda la superficie del territorio de España e islas adyacentes, será de nueve o de quince a lo más.

Artículo 104. El Consejo Real será el Tribunal de reposición.

Conocerá de los recursos de fuerza en materias eclesiásticas.

Tendrá un presidente y dos vicepresidentes.

El presidente será individuo nato del Consejo de Estado.

Artículo 105. Habrá en el Consejo Real un procurador general o fiscal y el número de sustitutos necesarios para la expedición de los negocios.

Artículo 106. El proceso criminal será público.

En las primeras Cortes se tratará de si se establecerá o no el proceso por jurados.

Artículo 107. Podrá introducirse recurso de reposición contra todas las sentencias criminales.

Este recurso se introducirá en el Consejo Real para España e islas adyacentes; en las Salas de lo civil de las Audiencias pretoriales para las Indias.

La Audiencia de Filipinas se considerará para este efecto como Audiencia pretorial.

Artículo 108. Una alta Corte Real conocerá especialmente de los delitos personales cometidos por los individuos de la familia Real, los Ministros, los senadores y los consejeros de Estado.

Artículo 109. Contra sus sentencias no podrá introducirse recurso alguno, pero no se ejecutarán hasta que el Rey las firme.

Artículo 110. La Alta Corte se compondrá de los ocho senadores más antiguos, de los seis Presidentes de Sección del Consejo de Estado, del presidente y de los dos vicepresidentes del Consejo Real.

Artículo 111. Una ley propuesta de orden del Rey a la deliberación y aprobación de las Cortes determinará las demás facultades y modo de proceder de la alta Corte Real.

Artículo 112. El derecho de perdonar pertenecerá solamente al Rey, y lo ejercerá oyendo al Ministro de Justicia en un Consejo privado compuesto de los Ministros, de dos senadores, de dos consejeros de Estado y de dos individuos del Consejo Real.

Artículo 113. Habrá un solo Código de Comercio para España e Indias.

Artículo 114. En cada plaza principal de comercio habrá un Tribunal y una Junta de Comercio.

TITULO XII

De La Administración De Hacienda

Artículo 115. Los vales reales, los juros y los empréstitos de cualquiera naturaleza, que se hallen solemnemente reconocidos, se constituyen definitivamente deuda nacional.

Artículo 116. Las Aduanas interiores de partido a partido y de provincia a provincia, quedan suprimidas en España e Indias.

Se trasladarán a las fronteras de tierra o de mar.

Artículo 117. El sistema de contribuciones será igual en todo el Reino.

Artículo 118. Todos los privilegios que actualmente existen concedidos a cuerpos o a particulares, quedan suprimidos.

La supresión de estos privilegios, si han sido adquiridos por precio, se entiende hecha bajo la indemnización; la supresión de los de jurisdicción será sin ella.

Dentro del término de un año se formará un reglamento para dichas indemnizaciones.

Artículo 119. El Tesoro Público será distinto y separado del Tesoro de la Corona.

Artículo 120. Habrá un Director General del Tesoro Público, que dará cada año sus cuentas por cargo y data, y con distinción de ejercicios.

Artículo 121. El Rey nombrará al Director General del Tesoro Público. Este prestará en sus manos juramento de no permitir ninguna distracción del caudal público, y de no autorizar ningún pagamento sino conforme a las consignaciones hechas a cada ramo.

Artículo 122. Un Tribunal de Contaduría General examinará y feneceará las cuentas de todos los que deban rendirlas.

Este tribunal se compondrá de las personas que el Rey nombre.

Artículo 123. El nombramiento para todos los empleos pertenecerá al Rey o a las autoridades a quienes se confie por las leyes y reglamentos.

TITULO XIII

Disposiciones Generales

Artículo 124. Habrá una alianza ofensiva y defensiva y perpetuamente tanto por tierra como por mar, entre la Francia y la España.

Un tratado especial determinará el contingente con que haya de contribuir cada una de las dos Potencias en caso de guerra de tierra o de mar.

Artículo 125. Los extranjeros que hagan o hayan hecho servicios importantes al Estado; los que puedan serle útiles por sus talentos, sus invenciones o sus industrias; y los que formen grandes establecimientos o hayan adquirido una propiedad territorial por la que paguen de contribución la cantidad anual de cincuenta pesos fuertes, podrán ser admitidos a gozar el derecho de vecindad.

El Rey concede este derecho enterado por relación del Ministro de lo Interior, y oyendo al Consejo de Estado.

Artículo 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es asilo inviolable, no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, o por una orden que dimane de la autoridad pública.

Artículo 127. Ninguna persona residente en el territorio de España y de Indias podrá ser presa, como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita.

Artículo 128. Para que el auto en que se manda la prisión pueda ejecutarse, será necesario:

- 1º. Que explique formalmente el motivo de la prisión y la ley en virtud de que se manda.
- 2º. Que dimane de un empleado a quien la ley haya dado formalmente esta facultad.
- 3º. Que se notifique a la persona que se va a aprehender y se la deje copia.

Artículo 129. Un alcaide o carcelero no podrá recibir o detener a ninguna persona, sino después de haber copiado en su registro el auto en que se manda la prisión. Este auto debe ser un mandamiento dado en los términos prescritos en el artículo antecedente, o mandado de asegurar la persona, o un derecho de acusación o una sentencia.

Artículo 130. Todo alcaide o carcelero estará obligado, sin que pueda ser dispensado por orden alguna, a presentar la persona que estuviere presa al magistrado, encargado de la policía de la cárcel, siempre que por él sea requerido.

Artículo 131. No podrá negarse que vean al preso sus parientes y amigos que se presente con una orden de dicho magistrado; y éste estará obligado a darla, a no ser que el alcaide o carcelero manifieste orden del juez para tener al preso sin comunicación.

Artículo 132. Todos aquellos que no habiendo recibido de la ley la facultad de hacer prender, manden, firmen o ejecuten la prisión de cualquiera persona; todos aquellos que aun en el caso de una prisión autorizada por la ley, reciban o detengan al preso en un lugar que no esté pública y legalmente destinado a prisión; y todos los alcaides y carceleros que contravengan a las disposiciones de los tres artículos precedentes, incurrirán en el crimen de detención arbitraria.

Artículo 133. El tormento queda abolido: todo rigor o apremio que se emplee en el acto de la prisión, o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito.

Artículo 134. Si el Gobierno tuviera noticias de que se trama alguna conspiración contra el Estado, el Ministro de Policía podrá dar mandamiento de comparecencia y de prisión contra los indiciados como autores y cómplices.

Artículo 135. Todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución de los que actualmente existen y cuyos bienes, sea por si sólo o por la reunión de otros en una misma persona, no produzcan una renta anual de cinco mil pesos fuertes, queda abolido.

El poseedor actual continuará gozando de dichos bienes restituidos a la clase de libres.

Artículo 136. Todo poseedor de bienes actualmente afectos a fideicomiso, mayorazgos o sustitución, que produzcan una renta anual de más de cinco mil pesos fuertes, podrá pedir, si lo tiene por conveniente, que dichos bienes vuelvan a la clase de libres.

El permiso necesario para este efecto ha de ser el Rey quien le conceda.

Artículo 137. Todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución de los que actualmente existen, que produzca por sí mismo o por la reunión de muchos fideicomisos, mayorazgos o sustituciones en la misma cabeza, una renta anual que exceda de veinte mil pesos fuertes, se reducirá al capital que produzca líquidamente la referida suma; y los bienes que pasen de dicho capital volverán a entrar en la clase de libres, continuando así en poder de los actuales poseedores.

Artículo 138. Dentro de un año se establecerá, por un reglamento del Rey, el modo en que se han de ejecutar las disposiciones contenidas en los tres artículos anteriores.

Artículo 139. En adelante no podrá fundarse ningún fideicomiso, mayorazgo o sustitución, sino en virtud de concesiones hechas por el Rey por razón de servicios en favor del Estado, y con el fin de perpetuar en dignidad las familias de los sujetos que los haya contraído.

La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos o sustituciones, no podrá en ningún caso exceder de veinte mil pesos fuertes ni bajar de cinco mil.

Artículo 140. Los diferentes grados y clases de nobleza actualmente existentes, serán conservados con sus respectivas distinciones, aunque sin exención alguna de las cargas y obligaciones públicas, y sin que jamás pueda exigirse la calidad de nobleza, para los empleos civiles ni eclesiásticos, ni para los grados militares de mar y tierra.

Los servicios y los talentos serán los únicos que proporcionen los ascensos.

Artículo 141. Ninguno podrá obtener empleos públicos, civiles y eclesiásticos, si no ha nacido en España o ha sido naturalizado.

Artículo 142. La dotación de las diversas Ordenes de Caballería no podrá emplearse según que así lo exige su primitivo destino, sino en recompensar servicios hechos al Estado. Una misma persona nunca podrá obtener más de una encomienda.

Artículo 143. La presente Constitución se ejecutará sucesiva y gradualmente por decreto o edictos del Rey; de manera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en ejecución antes del 1º. de enero de 1813.

Artículo 144. Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y de la nación.

Artículo 145. Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de la imprenta.

Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes.

Artículo 146. Todas las adiciones, modificaciones y mejoras que se haya creído conveniente hacer en esta Constitución, se presentarán de orden del Rey al examen y deliberación de las Cortes, en las primeras que se celebren después del año de 1820.

Comuníquese copia de la presente Constitución, autorizada por nuestro Ministro Secretario de Estado, al Consejo Real y a los demás Consejos y Tribunales, a fin de que se publique y circule en la forma acostumbrada.

Bayona, 6 de julio de 1808.